

ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA

INCORPORACION

DEL

Ing. Agr. CARLOS A. LIZER y TRELLES

Sesión Extraordinaria del
29 de setiembre de 1947

BUENOS AIRES

1948

ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA

MESA DIRECTIVA

<i>Presidente</i>	Dr. Joaquín S. de Anchorena
<i>Vicepresidente</i>	Dr. Tomás Amadeo
<i>Secretario General</i>	Dr. José R. Serres
<i>Secretario de Actas</i>	Dr. Daniel Inchausti
<i>Tesorero</i>	Ing. Saturnino Zemborain

Académicos de número

Dr. Andrés R. Arena	Ing. F. Pedro Marotta
Ing. Guillermo R. Aubone	Gral. Dr. José Morales Bustamante
Ing. José Ma. Bustillo	Dr. Oscar M. Newton
Dr. Angel Cabrera	Ing. Lorenzo R. Parodi
Dr. Agustín N. Candioti	Dr. Federico Reichert
Dr. Miguel Angel Cárcano	Dr. Francisco Rosenbusch
Ing. Miguel F. Casares	Dr. Federico Sívori
Ing. Franco E. Devoto	Agrón. Silvio Spangenberg
Ing. Julián Frers	Dr. Emilio Solanet
Dr. Leopoldo Giusti	Dr. Luis Van de Pas
Dr. Tomás A. Le Breton	Dr. César Zanolli
Ing. Carlos A. Lizer y Trelles	

Académicos Honorarios

Dr. Guido Finzi	Dr. Félix Gordon Ordás
Dr. Orla Jensen	Ing. José M. Ricard
Dr. W. H. Keeson	Dr. Cesáreo Sanz Egaña

Académicos de Número fallecidos

Belarmino Barará	Arturo Lanusse
Alejandro Botto	Francisco P. Lavallo
Virginio Bossi	José Lignières
Ernesto Cánepa	Moldo Montanari
Ramón J. Cárcano	Juan N. Murtagh
Emilio A. Coni	Pedro T. Pagés
Alfredo Demarchi	Leonardo Pereyra Iraola
Angel Gallardo	José Ma. Quevedo
Carlos D. Girola	Exequiel Ramos Mexía
Manuel Güiraldes	Ricardo Schatz
Fernando Lahille	Damián Torino
Pablo Lavenir	

Académicos Honorarios fallecidos

Coronel Young Dunlop
Dr. Cayetano Martinoli
Dr. Henri Vallée

PRODUCTOS USADOS EN TERAPEUTICA VEGETAL Y LEGISLACION REPRESIVA DE LAS SOFISTICACIONES

Señores:

Tócame ahora llenar, con harto retardo, otro de los requisitos exigidos por el estatuto de nuestra institución, para poder ostentar con todos sus cabales el honroso título de académico.

Cuando a honra tuve ser designado para ocupar el cargo en el año 1942, me puse a meditar acerca del pensamiento de Anatole France, quien en una de sus obras manifiesta esta sentencia que traduzco, a continuación, lo más fielmente posible: "Los viejos están demasiado aferrados a sus ideas. De ahí que los autóctonos de las islas Fidji maten a sus padres cuando se tornan ancianos. Facilitan de tal modo la evolución, mientras nosotros la retardamos con la creación de academias" ⁽¹⁾.

Sea cual fuere el concepto que cada cual se forje en cuanto atañe a estas corporaciones y a sus miembros, el hecho real es que en todas ellas el beneficiario está obligado a leer el consabido discurso, verdadero espaldarazo consagradorio.

La elección del tema y su desarrollo en el corto lapso de contados minutos hizome cavilar, por cuanto no se trata aquí de importunar al auditorio con asuntos abstrusos o técnicos, destinados a reducido número de especialistas, sino de traer a cuento problemas de índole general, al alcance de cualquier profesional y del público culto.

El tema escogido, tras de estar comprendido entre los abarcados por el último concepto preenunciado, reviste para quienes tienen inquietudes por los problemas agrarios, importancia que nadie podría negar, pues atañe directamente al agricultor, principal custodia de sus cultivos contra el ataque de las plagas.

Si nos basamos en los principios morales, bien sabemos que desde que el mundo es mundo, en él moran dos categorías de hombres: los buenos y los malos. El mismo principio, aunque en forma más restringida y precisa, se aplica a los comerciantes de

(1) Le Jardin d'Epicure.

algunos de los cuales se ha dicho que son simples hurtadores con patente, verdad inconcusa pasada, desde ha mucho, a la categoría de axiomática.

Más de dos décadas han transcurrido desde mi iniciación en el estudio de este problema —aun no resuelto, como se verá más adelante— hartos serio, no obstante lo cual tan insignificante dedicación le han deparado las cámaras legislativas.

Desde el año 1925, aproximadamente, las quejas de los hortelanos principalmente, arreciaban más y más e innúmeras eran las recibidas en el Departamento del ramo; los expedientes respectivos llegaban a las oficinas técnicas correspondientes, una de las cuales se hallaba a mi cargo. ¿Y a qué se referían tales quejas?; pues al fraude en la elaboración de los insecticidas, fungicidas y herbicidas, expendidos en plaza, tanto para la prevención cuanto para la erradicación de los enemigos de los cultivos.

Los vegetales de los cuales nos aprovechamos para la alimentación, vestidos y otros menesteres tienen, al igual que el hombre y los animales, enfermedades, parásitos y demás enemigos de variada naturaleza, cuya eliminación constituye uno de los capítulos más nutridos, difíciles y atrayentes de la Zoología Agrícola y la Fitopatología, designado con la denominación de terapéutica vegetal. Esa eliminación se ha efectuado, desde lejanos tiempos, por medio de productos químicos de origen orgánico o inorgánico, sean ellos de composición simple o compleja.

Cierto es, también, que el progreso de las antedichas disciplinas ha introducido métodos eliminatorios o, mejor dicho, sustituyentes de la terapéutica propiamente dicha, con el advenimiento de la lucha biológica y la creación de variedades resistentes a ciertas plagas calamitosas. El amplio campo de la biología, por un lado y la genética, por otro, vienen en nuestra ayuda, mas como esta suerte de investigaciones demanda, en la mayor parte de los casos, años enteros de paciente labor para llegar a obtener resultados definitivos, los terapeutas tienen aun mucho trabajo por delante si anhelan obtener productos nuevos o perfeccionar los ya existentes, de modo que incidan lo menos posible en la cuenta cultural y sean de reconocida eficiencia.

Los remedios que recetan los médicos para aliviar las enfermedades humanas se hallan protegidos contra las sofisticaciones por medio de las leyes y reglamentaciones pertinentes; justo es que sea así por cuanto la salud es patrimonio primordial para el bienestar de la humanidad. ¿No hemos asistido acaso a ruidosos procesos incoados contra fabricantes —entiéndase malandrines sin escrúpulos— que libraban a la venta medicinas inocuas y, a las veces, también nocivas? ¿No leemos a menudo en los rótulos las advertencias de todos

conocidas que rezan: concluída esta pócima destrúyase el envase? ¿No llega la inconciencia y la superchería de ciertos comerciantes, calificados en la forma ya expresada, a expender alimentos en abierta contradicción con los más elementales preceptos de la higiene, tornándose, por tanto, en envenenadores públicos?

Si hay entes que muestran tanta sordidez como los capaces de jugar con la vida de sus semejantes, ¿cómo hemos de pretender que no los haya también en tratándose de la salud de los animales y de las plantas? De ahí, pues, la pululación de fabricantes de productos a los cuales ya me he referido y la alarma de la gran familia agricultora que presurosa acude a las autoridades competentes en demanda de consejo y protección. Pero, ¿qué ayuda pueden prestar esas autoridades, por más competentes que sean, si no disponen del instrumento legal para reprimir el comercio intérlope de productos terapéuticos? Ahí está, cabalmente, el punto neu-rálgico de este asunto: la falta del instrumento legal.

Dije hace un momento que más de dos décadas han transcurrido desde mi iniciación en el estudio de este problema; así es, en efecto, cuando en aquel entonces los técnicos a cargo de las investigaciones referentes a los animales perniciosos, en unión de los encargados de las de los organismos de origen criptogámico, palpamos la imperiosa necesidad de proponer la sanción de algún reglamento que pusiese coto al abuso existente, basados en las denuncias a que me he referido.

Este principio de acción tuvo como punto de partida la resolución del ministro Mihura, de fecha 10 de febrero de 1927. Previo un corto considerando, la parte dispositiva se componía del artículo 1º que rezaba así: "Designar al Ing. Agr. don Pablo Lavenir, Dr. Fernando Lahille, Ing. Agr. Carlos A. Lizer y Trelles, Juan B. Marchionatto y Raúl Bazzi, para que reunidos en comisión estudien y dictaminen respecto de la preparación de productos insecticidas o fungicidas oficiales, a su aplicación, a la autorización de venta de específicos industriales y a su control permanente indispensable. El artículo 2º, el de rigor, comuníquese, etc.

He leído íntegramente esta resolución, pues ella es la primera que encomienda a un núcleo de descollantes técnicos (no lo digo por mí) la iniciación del estudio de un reglamento atinente a la fiscalización de los productos destinados a la terapéutica vegetal. Por tal motivo debe considerársela como documento de carácter histórico.

La comisión antedicha propuso al ministro el anteproyecto de decreto convertido, luego, en firme el 19 de diciembre de 1927. A poco que se analiza la última parte del artículo 1º, se echa de ver que los miembros de la referida comisión éramos, en ese momento

por lo menos, unos santos varones, horros de aprensión, crédulos y confiados en la hombría de bien de nuestros semejantes y, particularmente, de todos cuantos a la elaboración y comercio de los productos cuestionados se dedican. Obsérvese el texto de ese artículo: "El Ministerio de Agricultura aprobará los productos insecticidas, fungicidas y demás productos industriales destinados a la prevención y destrucción de los enemigos de las plantas cultivadas o útiles que, a su requerimiento, así lo solicitaren del mismo los fabricantes, consignatarios, representantes, etc.". Basta con esto último para considerar a ese decreto como el más lírico de los dictados entre nosotros en todos los tiempos; pero ¿cómo es posible imaginarse que los adulteradores empedernidos de remedios vayan a requerir la aprobación de éstos si ese requerimiento es sólo voluntario?

Redundante sería agregar que las cosas siguieron en el mismo estado, y los sofisticadores "haciéndose la América", hasta siete años después de promulgado aquel lírico decreto, en que el ministro Duhau dictó otra resolución cuya parte dispositiva en el artículo 1º decía: "Designase a los técnicos Ings. Agrs. Juan B. Marchionatto, jefe de la División de Fitopatología, Carlos A. Lizer y Trelles, jefe de la División de Zoología Agrícola, Dr. Carlos Gini Lacorte, jefe de la Fábrica de Insecticidas, Ing. Agr. Rubén Bence Pieres, Director de la Estación Experimental de Concordia e Ing. Juan Bennasar, de Y. P. F., para que reunidos en comisión, bajo la presidencia del primero de los nombrados, formulen un anteproyecto de decreto por el que se reglamente las condiciones que deberán reunir los productos destinados a combatir las plagas de la agricultura y demás requisitos de práctica".

Volvió el Ing. Marchionatto y el que habla a integrar nuevamente la segunda comisión nombrada por el Ministerio de Agricultura, la que se expidió en harto breve tiempo y el anteproyecto de reglamentación se convirtió en el decreto de 9 de noviembre de 1934. Ya en éste no se trataba de presentación voluntaria, como en el de 1927, sino obligatoria, pues en el artículo 3º se establece en forma terminante: "El Ministerio de Agricultura no otorgará autorización alguna de venta sin que previamente se compruebe, etc., lo cual demuestra que la experiencia adquirida desde 1927 de algo había servido. Diez días después, el 19 de noviembre, el mismo ministro dictó la resolución reglamentaria de los artículos 1º al 8º, el 12º y el 13º, y otra especial del 22 del mismo mes, por la cual se designaba la comisión técnica especial establecida en el artículo 5º, que me cupo en suerte integrar, en carácter de secretario, durante un lapso de ocho años y que quedó disuelta el 5 de febrero de 1944. Esta comisión tuvo a su cargo la autorización de venta y demás

requisitos exigidos a los productos presentados y estuvo presidida por el jefe del Laboratorio de Química, Dr. Hércules Corti.

Aun cuando en el último decreto mencionado se establece la disposición precautelar antedicha del artículo 3º, los resultados obtenidos en la práctica dejaban mucho que desear, razón por la cual la comisión preparó un anteproyecto de ley que fué remitido al Senado, con el mensaje correspondiente, firmado por el entonces presidente Justo con la refrendata del ministro Cárcano, nuestro ilustre compañero de academia. Además de aquél fué remitido, al mismo tiempo, otro proyecto de ley, para salvaguardar del dolo los productos terapéuticos destinados al tratamiento de las enfermedades y parásitos de los animales; no podía hacer menos un ministro ganadero.

Ambos proyectos tuvieron como único honor el de la ley Olmedo, de modo que el P. E., tres años cabales después, el 24 de junio de 1939, reiteró ante el H. Congreso de la Nación, el mismo mensaje y los mismos proyectos, firmados por el presidente Ortiz y el ministro Padilla. La comisión de agricultura, industrias y comercio del Senado formuló el correspondiente despacho, leído y discutido, con asistencia del ministro, en la sesión del 31 de agosto del referido año y formuló, a su vez, un proyecto propio, firmado por los senadores Villafañe, Landaburu y Suárez Lagos, en el que estaban incluidos los dos antedichos, cuyos siete artículos quedaron sancionados, pero la ley respectiva no pasó a ser realidad.

Por segunda vez, entonces, se malograba el pedido del P. E. y los esfuerzos de los técnicos que presenciábamos, impasibles e inermes, un estado de cosas cada vez más grave, en virtud del número creciente de productos terapéuticos de calidad poco recomendable, elaborados en el país. Tanto más delicada se tornaba la situación de los agricultores, cuanto en ese año se iniciaron, a causa de la guerra mundial, las restricciones en la importación de las especialidades consagradas.

Transcurrieron otros diez años y nada se hizo a este respecto, hasta que el 23 de junio de 1944 nuevo decreto es dictado, mucho más explícito y completo que todos los anteriores, pero con la misma inoperancia legal. El artículo 2º de esta reglamentación crea el Tribunal de Fiscalización de los productos de terapéutica vegetal, cuyas funciones son similares a las que desempeñaba la Comisión de Insecticidas y Fungicidas, disuelta ese mismo año, como ya lo he expresado.

En virtud de que el mencionado es el último decreto y se halla actualmente en vigor, corresponde ahora que haga la crítica de todos los dictados y cuya excelente finalidad puede ser tan sencillamente burlada por el menos avezado,

No es necesario poseer profundos conocimientos de derecho administrativo, para saber que toda ley se reglamenta por decretos y, de ahí, cuando éstos son elaborados por funcionario competente siempre se hace referencia, por lo menos en los considerandos, de la ley respectiva. Pero, cabalmente, ninguno de los aquí mencionados se basan en ley alguna y, por ende, carecen del vigor legal. Se ha argüido que la 4863 implícitamente faculta al P. E. a dictar las reglamentaciones de la referencia, por cuanto aquella es de defensa de la agricultura y éstas también tratan de la protección de los vegetales útiles contra el ataque de las plagas por medio de sustancias químicas. En resumen, es allegar a este asunto el socorrido sonsonete del “espíritu de la ley”, argumento tan elástico, cuan dúctil y de tan variada hermenéutica que, bien a menudo, ni los mismos letrados llegan a ponerse de acuerdo.

Según mi sentir, esta manera de pensar es errónea; ninguno de los decretos encaja en el articulado de la precitada ley 4863 y esto lo vengo repitiendo a mis alumnos desde principios de 1929. En el segundo de los decretos dictados, de 9 de noviembre de 1934, se hace alusión, en el artículo 8º, a la ley 11.275, llamada de identificación de mercaderías, en lo que atañe a las sanciones penales aplicables a quienes cometen alteraciones o fraudes en las mercancías expendidas por fabricantes, importadores, consignatarios, etc., poco escrupulosos. Parecería que con tal instrumento se sortean los escollos y queda resuelto el problema, mas no ha de creerse tal, pues ese apoyo es insignificante y no alcanza a tener la amplitud requerida por una ley especial, que abarque todos los puntos y las complejidades de esta materia.

He de precisar ahora los principios esenciales y subrayaré, luego, los considerados como más eminentes, que tuvimos en cuenta al pergeñar nuestro anteproyecto antes citado, así como lo han apoyado otros técnicos entre quienes cabe mencionar muy particularmente al colega Marchionatto, verdadero adalid, que tanto afán ha mostrado y harto ha bregado en pro de la sanción legal respectiva. Esos principios son similares a los que aparecen en los considerandos del decreto de 1934, a saber: 1º Todo producto destinado a la prevención o destrucción de los enemigos de los vegetales útiles, debe ser presentado con carácter obligatorio a los poderes públicos; 2º rechazo de toda especialidad de composición secreta (aun cuando aquí caben excepciones, como diré luego); 3º comprobación, por intermedio de las oficinas técnicas, de la composición físico-química enunciada en la fórmula por el presentante; 4º veracidad de sus usos y 5º fiscalización permanente de las especialidades autorizadas y libradas a la venta. En el primitivo anteproyecto preparado por nuestra comisión habíamos añadido un principio esencial mas suprimido,

luego, por la Superioridad; era el referente a la no certificación de la eficacia de los productos terapéuticos. Tal principio es obvio: el poder público sólo puede, sólo debe, mejor dicho, autorizar la venta de aquéllos, llenados que sean todos los requisitos exigidos y esa autorización permanecerá en pleno vigor, mientras la especialidad no sea modificada en su constitución físico-química. Algunos funcionarios se habían mostrado partidarios de la “aprobación”, en vez de la “certificación”, pero otros, entre quienes me cuento, se inclinaban a la “autorización”, que si bien llena los fines que se procuran obtener, no comprometen al poder público en ninguna forma.

Quiero explicar ahora las excepciones a que puede dar lugar el segundo de los principios prealudidos, esto es, la no aceptación de los productos de composición secreta. A este respecto pueden presentarse casos en que desde el punto de vista jurídico, no corresponde el rechazo, por cuanto aquí entran las especialidades protegidas por la ley de patentes y marcas. Sea como fuere, el jurisconsulto y el legislador son los llamados a resolver este problema, que no deja de tener muy interesante cariz.

He dicho también que subrayaría los principios esenciales antes expuestos de mayor valor legal, como quiera que todos ellos se armonizan para dar a la futura ley el vigor necesario en su parte ejecutiva. En mi sentir, dos son estos principios sobre los cuales es necesario hacer hincapié: el que dispone el análisis físico-químico, por intermedio de los laboratorios oficiales, y el referente a la ulterior y permanente fiscalización. Innegable es que lo primero atañe al conocimiento intrínseco de la especialidad, sin cuyo requisito no sería posible autorizar la venta y lo segundo constituye la verdadera llave que pone freno al ansia desmedida de los logreros, esa llave única capaz de evitar las sofisticaciones, el engaño del agricultor, las pérdidas de sus cosechas y, en fin, la bancarrota subsiguiente.

He de citar, entre tantos, dos ejemplos —en uno de los cuales me tocó intervenir— que dan la medida del peligro que entraña para el productor el no disponer de especialidades eficientes. No muy lejos de la capital federal un hermoso naranjal en explotación, compuesto de unos cientos de plantas, había contraído cierta plaga y era imperioso el tratamiento adecuado inmediato. El propietario se hizo aconsejar y adquirió uno de los productos de venta en plaza; poco después de la pulverización la mayor parte de los naranjos ¿creen los que me escuchan que se curaban?, ¡no! todo lo contrario, se desfoliaban y perecían uno tras otro. Corolario: miles de pesos de pérdidas y el consiguiente pleito, largo, engorroso y caro. El segundo caso, en que fuí actor, es el siguiente: los cultivadores

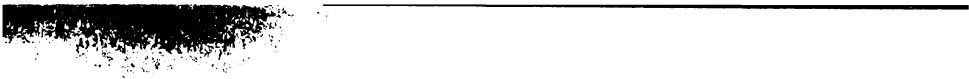
chaqueños de algodónero denunciaban al Departamento de Agricultura —y de ellas se hacían eco los periódicos locales— que el verde de París de determinada procedencia, era inocuo para la erradicación de la oruga de la hoja de aquella malvácea. Tanto fué el clamor que se me designó perito con el fin de dirimir el litigio. Concluído el cometido encomendado pude llegar a una conclusión terminante: mi fallo se redujo a esto: la razón la tenían los denunciantes por cuanto el tenor en principio activo, aceto arsenito cúprico, que es el agente tóxico del insecticida, se hallaba en tan exiguo por ciento, que las orugas lo ingerían y seguían tan campantes, como si tal. El corolario de este caso, en su fase más grave, quizás más que el anteriormente mencionado, se tradujo en pérdidas ingentes de inúmeros productores.

Nótese, pues, la importancia que reviste la fiscalización constante y la aplicación de las sanciones penales correspondientes, única forma de concluir con el dolo, si hemos de creer aquello de “el loco por la pena es cuerdo...”.

Pero esas sanciones penales aun cuando estén explícitamente establecidas en la ley y decretos reglamentarios respectivos, no surten efecto si no disponen del complemento indispensable, es decir, de la organización técnico-administrativa especializada, que se dedique exclusivamente al cometido asignado. De ahí que en el anteproyecto presentado al ministro Cárcano en 1936, tuvimos especial precaución de agregar, a modo de apéndice, los recursos requeridos para el cumplimiento integral de la ley por medio del referido organismo, cuya estructuración también proponíamos. En él lo más importante, para impedir la venta de especialidades sofisticadas, adulteradas o modificadas en la fórmula de composición declarada y ratificada oficialmente, es el cuerpo volante de inspectores encargados, en todo el país, de la toma de muestras con miras a la comprobación de contenido y composición por los técnicos de laboratorio.

Inoficioso, por demás, sería la exigencia de la presentación obligatoria de los productos para la certificación de las fórmulas declaradas por los mismos presentantes, si luego no se toman los recaudos premencionados que cercenen el apetito desmedido de lucro, de quienes libran al comercio especialidades muy distintas de las elaboradas, con todo esmero, para la obtención de la autorización de venta.

Con esta disposición, que es el instrumento legal con que se cuenta, encarada hacia la aplicación de las sanciones penales que correspondieren (multa, clausura del establecimiento, comiso, arresto del inculpado, etc.), se pondría coto a la sofistería y, con ello, nuestro país no seguiría a la zaga de los que disponen de leyes y reglamentos adecuados. Antes, por el contrario, quienes de algo de esto enten-



demos, anhelamos que la República se ponga, sin pérdida de mayor tiempo, a la vanguardia en este capital asunto, tanto más, cuanto ya lo está en su carácter de nación agrícola-ganadera por excelencia.

No ha de suponerse que en el corto lapso disponible en esta velada, haya podido desarrollar ampliamente el tema de mi disertación; sólo lo he esbozado y detenido en los puntos sobresalientes de aquél, para llegar a esta conclusión: que el poder legislativo sancione cuanto antes la ley protectora del agricultor contra los malos comerciantes que, desde tiempo atrás, lo han estado explotando con la venta de remedios inocuos para las plagas y, en ciertos casos, perniciosos para los cultivos.

Ya había puesto punto final a este trabajo cuando el Ing. Marchionatto —a quien mis más cumplidas gracias expreso nuevamente— puso en mis manos el texto del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio de la Cámara de Diputados, entrado en la sesión del 20 de setiembre del año último y lleva la orden del día número 89.

El proyecto de la comisión tiene similar estructura básica al remitido por el ministro Cárcano, aunque cabe decirlo, está ampliado y perfeccionado.

Nótese la edad de este despacho; hoy se cumple un año y nueve días desde que entró en sesión; mañana se clausura el Congreso Nacional y hete ahí a nuestra ley todavía por sancionarse. Idéntica suerte corre el proyecto presentado en la misma sesión relacionado con las especialidades para el tratamiento de las enfermedades y parásitos del ganado y animales domésticos.

Decididamente estamos hoy lo mismo que ayer.

Mañana, Dios dirá; yo sigo siendo optimista...